Señores

**RAFAEL ANTONIO URIBE ECHEVERRI**

**JEFE DE OFICINA JURÍDICA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**

**REFRENCIA: RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION No. 04 de 2025**

**CONTRATO:** CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES NO. 523 DE 2022.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MALLA VIAL 22.

**GARANTE:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA.

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, de manera respetuosa presento **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra laResolución No. 04 de 2025por medio de la cual se declaró el incumplimiento y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria solicitando desde ya, su **REVOCATORIA** conforme a los siguientes argumentos facticos y jurídicos:

# CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS PARA REVOCAR LA RESOLUCION No.04 de 2025.

1. **EL DESPACHO DESCONOCIÓ QUE NO SE ACREDITÓ UN INCUMPLIMIENTOS QUE AFECTEN DE MANERA GRAVE Y DIRECTA A EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES NO. 523 DE 2022.**

Todo el debate probatorio acreditó que el presunto incumplimiento objeto del litigio no generó una afectación grave y directa a la ejecución del contrato de arrendamiento de Muebles No. 523 de 2022, e incluso el despacho en su parte resolutiva lo reconoce y por ello determina que no existe un perjuicio ocasionado a la entidad. Por ello, no se entiende como es que en la parte resolutiva se indica que no existió un incumplimiento gravoso para la entidad, pero finalmente se declara un incumplimiento parcial, lo que evidentemente evidencia una falsa motivación, pues no existen argumentos coherentes y concretos que siendo utilizados por la entidad apoyen lo que finalmente decidió. Por lo que es procedente que se revoque el acto administrativo objeto de reparo.

Máxime cuando, recabadas las pruebas al interior del procedimiento, en especial las declaraciones, se ha logrado desvirtuar los cargos de incumplimiento que le fueron endosados al contratista. Se ha probado que el Contrato de Arrendamiento de Muebles No. 523 de 2022 fue cumplido a cabalidad, dado que el contratista honró sus obligaciones. Muestra de ello es que varios de los equipos cuya falta de suministro se alegaba en el pliego de cargos fueron entregados, utilizados y facturados por la misma UAERMV, lo que desvirtúa la existencia de un incumplimiento real con mérito de su declaratoria. Se ha demostrado que el carrotanque irrigador de emulsión operó entre marzo y junio de 2024, fue facturado y pagado por la entidad contratante, al igual que la retroexcavadora sobre llantas (pajarita), que estuvo en operación entre enero y julio del mismo año y cuyos servicios fueron aceptados por la UAERMV.

Además, de la valoración de las pruebas testimoniales emerge que además que hubo decisiones internas de la UAERMV que afectaron la operatividad del contrato y no pueden ser imputadas al contratista. Se verificó que, en reuniones celebradas en abril de 2024, se instruyó al contratista sobre la inutilidad de ciertos equipos menores como la planta, la luminaria, la placa vibratoria y la aplanadora, reconociéndose que estos ya no eran necesarios para la ejecución del contrato. También se evidenció que la supervisión del contrato presentó serias inconsistencias y contradicciones, pues el ingeniero Mauricio Ducon, supervisor del contrato, no realizó verificaciones en campo sobre la presencia de la maquinaria, basándose exclusivamente en reportes de dirección de obra. Adicionalmente, en su informe de supervisión se mencionan equipos cuya entrega no fue requerida formalmente por la entidad, lo que desvirtúa la existencia de un incumplimiento contractual en cabeza del contratista garantizado.

A tono con lo anterior, el despacho no hizo un análisis concreto frente a lo mencionado en los alegatos con relación a la existencia de factores externos, ajenos a la voluntad del contratista, que influyeron en la ejecución del contrato, tales como condiciones climáticas adversas y dificultades logísticas derivadas de la distancia entre el lugar de suministro de los equipos y el sitio de obra en Sumapaz. Además, hubo duplicidad en las solicitudes de maquinaria debido a que múltiples funcionarios de la entidad realizaban requerimientos simultáneos, lo que generó confusión sobre cuáles equipos eran realmente necesarios en cada momento. Este factor explica, por ejemplo, que algunas máquinas hayan sido solicitadas en varias oportunidades y canceladas posteriormente, lo que demuestra que no hubo una falta de disposición del contratista para cumplir, sino un desorden administrativo en la gestión de requerimientos.

Para sustento de lo anterior, debe anunciarse que, respecto al equilibrio económico del contrato, existen teorías reconocidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado como la de la imprevisión y el hecho del príncipe, que constituyen un desequilibrio económico que debe ser solventado por la entidad pública. Así pues, se ha dicho:

 “El principio del equilibrio financiero del contrato, medular en el régimen jurídico de la contratación pública, consiste, entonces, en garantizar el mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso, de manera que si se rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento, so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a restituir tal equilibrio. (…) ante la ruptura del equilibrio económico del contrato, el contratista tiene derecho a exigir su restablecimiento, pues no obstante que debe asumir.

En otra oportunidad, se afirmó:

“Acá es preciso recordar que la ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato supone la alteración del sinalgia funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a su cocontratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), por razones no imputables a las partes”[[1]](#footnote-1)

Es dable acotar, que el Consejo de Estado ha reconocido que existen tres (3) situaciones capaces de romper el equilibrio contractual que debe mantenerse en las relaciones negociables con el Estado y que, correlativamente, implican el restablecimiento de la ecuación financiera, so pena de responsabilidad contractual. Estas situaciones son:

**(i)** Actos imputables a la administración por incumplimiento de sus obligaciones.

 **(ii)** Actos del Estado en ejercicio de sus potestades legales o constitucionales, lo que se ha denominado como el "hecho del príncipe"

**(iii)** Actos imprevisibles e irresistibles que no son imputables a ninguna de las partes, o teoría de la imprevisión.

 Estas situaciones pueden romper el equilibrio contractual y requieren acciones para restablecer la ecuación financiera y evitar posibles perjuicios. En todos estos casos, es necesario que la administración restablezca las condiciones contractuales y económicas, a efectos de reajustar la ecuación financiera del contrato. En virtud de lo expuesto, se ha demostrado que el contratista no incumplió el contrato de arrendamiento, sino que cumplió con sus obligaciones dentro de las condiciones pactadas y conforme a las necesidades reales del proyecto. La UAERMV aceptó, utilizó y pagó por varios de los equipos que se alegaban como no suministrados, y en otros casos, fue la misma entidad la que canceló su requerimiento o declaró su innecesaridad. En ese orden, no existe fundamento legal ni contractual para imponer sanción alguna al contratista, pues la carga probatoria ha demostrado que no hubo incumplimiento atribuible a su gestión.

En conclusión, se evidencia una clara falsa motivación, pues todo el debate probatorio acreditó que el presunto incumplimiento objeto del litigio no generó una afectación grave y directa a la ejecución del contrato de arrendamiento de Muebles No. 523 de 2022, siendo esto reconocido por el despacho en la parte resolutiva del acto administrativo e incluso cuando determinó que no existe un perjuicio ocasionado a la entidad. Por ello, no se entiende como es que en la parte resolutiva se indica que no existió un incumplimiento gravoso para la entidad, pero finalmente se declara un incumplimiento parcial, lo que evidentemente evidencia una falsa motivación, pues no existen argumentos coherentes y concretos que siendo utilizados por la entidad apoyen lo que finalmente decidió. Por lo que es procedente que se revoque el acto administrativo objeto de reparo.

1. **LA RESOLUCIÓN No. 04 DE 2025 NO ESTÁ DEBIDAMENTE MOTIVADA Y FUE EXPEDIDA DE FORMA IRREGULAR**

Nótese como existe una evidente falsa motivación pues no existe correlación entre lo enunciado en la parte resolutiva y lo finalmente decidió por la administración. Toda vez que su parte resolutiva la Resolución se decreta:





Pero al revisarse en su contenido, no se haya una mención explícita al desarrollo de un argumento lógico – jurídico en el cual la ALCALDIA explique porque se declara el incumplimiento si en varios renglones que contemplan varias páginas del acto administrativo se indicó que la falta de entrega de la maquinaria no constituyó ninguna afectación directa para la entidad, es decir no existen motivos bajos los cuales recaiga la decisión adoptada. Lo anterior no solo deja sin asidero probatorio lo anhelado por la administración, sino que lo deja carente de sentido porque no explica meridianamente porque se declaró el incumplimiento.

La falta de motivación de los actos administrativos implica la violación del debido proceso en contra de la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. en la medida en que no le permite controvertir la decisión ante las vías gubernativas y judiciales porque no hay premisas que refutar, ya que la ALCALDIA no las expone, simplemente expone la decisión de forma espontánea y sorpresiva en el acápite resolutivo del acto administrativo sin una antesala fáctica y una ambientación que respalde la aserción mediante el desglose argumental. Es por ello que esa clase de vicios constituye una causal de nulidad de los actos administrativos que incurran en ese defecto.

La necesidad de motivar los actos administrativos es de raigambre legal, por eso la falencia que se expone afecta a la Resolución No. 04 de 2025 desde un aspecto procedimental, formal, ya que ésta es la omisión en hacer expresos o manifiestos en el acto administrativo los motivos del mismo lo cual dificulta su inteligibilidad para el sujeto pasivo, destinatario de los efectos del acto mismo. En este sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta (Sentencia de 28 de febrero de 2008, expediente No. 15944), consideró lo siguiente en torno a este punto:

"(. . .) en tanto se limita a señalar el ejercicio de una facultad oficiosa y el cumplimiento de una función, pero en sí misma no contiene una fundamentación o explicación fáctica y probatoria referida al asunto en concreto, indicativa de los motivos de la decisión plasmada en la parte resolutiva. // (. . .) la motivación es una exigencia del acto administrativo (. . .) reclamable (. . .) de todos los actos y debe basarse en hechos ciertos y demostrados al momento de la emisión del acto, so pena de viciarlo de nulidad. por ausencia de uno de sus elementos esenciales(...)".

En ese sentido, deberá reponerse y en su lugar declarar terminado el proceso por no encontrar elementos para declarar el incumplimiento señalado en la Resolución No. 04 de 2025, máxime cuando la misma ALCALDIA expone que no sufrió perjuicio alguno por la supuesta demora en la entrega de la maquinaria, pues no incurrió en costos adicionales, ni mucho menos afectó los contratos en los que se pretendía usar este tipo de utensilios. Siendo así los motivos que se exponen en el acto administrativo son totalmente incoherentes a la realidad y a lo señalado en su parte resolutiva, generando inconsistencias y confusiones.

1. **LA RESOLUCIÓN VULNERÓ EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE DEBE GOBERNAR EN LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y CON ELLO EL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU GARANTE.**

Para dar sustento al presente reparo, empezaré por definir a la luz de la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa, el principio de congruencia, en aras de aterrizarlo al caso particular y demostrar como en el presente caso, éste fue abiertamente transgredido.

Sobre el particular, la Corte ha dicho:

**Sentencia T-033/02:**

“Para la Corte, la congruencia es una regla que condiciona la competencia otorgada a las autoridades públicas, y en este sentido, delimitan el contenido de las decisiones que deben proferir, de tal manera que: a) solamente pueden resolver sobre lo solicitado o, b) en relación directa con aspectos vinculados a lo pedido por los interesados y que se encuentren debidamente probados. Este es el alcance que tiene el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo - previamente citado -, mediante el cual se reconoce y delimita el poder decisorio de la Administración en relación con las peticiones presentadas por los administrados en agotamiento de la vía gubernativa, y ello es así, porque de la aplicación de la regla de la congruencia, surge como garantía y derecho de los administrados la prohibición de la no “reformatio in pejus”, institución que se encuentra consagrada en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución, por virtud del cual: “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

Así mismo, el Consejo de Estado ha dispuesto:

Consejo de estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 30 de octubre de 2013. C.P. Álvaro Namen Vargasn EXP. 2159:

“En este punto también es importante resaltar que para adoptar la decisión definitiva la administración deberá mantener las mismas garantías formales establecidas para el pliego de cargos acto con el cual deberá guardar coherencia como una manifestación del acatamiento de la administración al principio de congruencia y del respeto del debido proceso”.

En el caso de marras, es evidente que la administración no observó el principio mencionado, pues éste, aterrizado al trámite de incumplimiento, regido por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, exige que la decisión final de la entidad convocante, esté acompasada con los fundamentos fácticos y jurídicos en que se basó la citación al trámite, circunstancia que en el sub examine brilló por su ausencia, pues bien, al momento de citar a Audiencia de Incumplimiento, hizo consistir el mismo en las obligaciones relacionadas con el incumplimiento del contrato de arrendamiento No. 523 de 2022, señalando que las actividades no fueron completadas por el contratista. En tal virtud, tanto el contratista como la Compañía aseguradora que represento, presentamos descargos única y exclusivamente en relación con los cargos formulados frente a las obligaciones contractuales circunscritas a dichos frentes. No obstante, la entidad de manera arbitraria y en desobedecimiento del principio de congruencia, resolvió a través del acto recurrido, declarar el incumplimiento de obligaciones contractuales de las cuales no sufrió afectación alguna.

En este orden de cosas, claro es que al CONSORCIO MALLA VIAL 22, y a la aseguradora que represento, les fue cercenada la posibilidad de defenderse en relación con lo que verdaderamente le fue causado un perjuicio para la entidad, pues indicó en todo su acto administrativo que no existió perjuicio y no hay incumplimiento, pero finalmente declara un incumplimiento parcial, configurándose así una flagrante violación al debido proceso y derecho a la defensa de los mencionados, lo que una vez más demuestra la ilegalidad de la Resolución No. 04 de 2025, haciendo viable que la administración, revoque integralmente lo decidido en ella.

1. **FALSA MOTIVACIÓN: LA IMPOSICIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL NO GUARDÓ NINGÚN RESPETO POR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN, OBLIGATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL.**

Sobre el particular, es importante poner de presente que la ALCALDIA, impuso una cláusula penal desproporcionada, sin consideración alguna pues si no existió un agravio o un perjuicio para la entidad no existían motivos para afectar la cláusula penal, pues ello lo único que evidencia es un enriquecimiento sin justa causa. Por cuanto si la Administración no sufrió ninguna situación de índole económica o del uso injustificado de personal para lograr obtener los elementos que supuestamente el contratista incumplió en su entrega pues no tiene por qué solicitar una afectación de la cláusula penal.

Recordemos que la cláusula penal pecuniaria es una estipulación pactada de común acuerdo por las partes del contrato con el objeto de establecer previamente un monto o una cuantía equivalente al valor de los perjuicios que se causen como consecuencia del incumplimiento contractual de una de las partes. El efecto jurídico más importante de la cláusula mencionada es que exime a la parte cumplida de la obligación de demostrar la cuantía de la indemnización.

Según el Doctor Rodrigo Escobar Gil, la cláusula penal pecuniaria es *“una estipulación en la que se fija anticipadamente el valor de la indemnización que cada parte puede reclamar por el incumplimiento de las obligaciones de la otra”[[2]](#footnote-2)*. Es una tasación anticipada de perjuicios, cuyo efecto jurídico es que exime al acreedor (parte cumplida) de demostrar el monto de los perjuicios.

Por su parte el tratadista Jorge Pino Ricci[[3]](#footnote-3), define la cláusula penal pecuniaria como aquella *“estipulación contractual propia del derecho común mediante la cual las partes acuerdan cancelar una sanción pecuniaria, en caso de incumplimiento en las obligaciones contractuales. Por otra parte, puede definirse también como estimación anticipada, según se acuerde definitiva o no, de los perjuicios que eventualmente pueden sufrirse como consecuencia del incumplimiento de una de las partes”.*

Teniendo en cuenta que la cláusula penal pecuniaria constituye una tasación anticipada de perjuicios, el Código Civil estableció una fórmula que permite graduar la misma **en función del porcentaje de ejecución del contrato**. Lo anterior, con el objeto de evitar que se produzca un enriquecimiento sin causa a favor de la parte que hace efectiva la mencionada estipulación. Es por ello que el artículo 1596 del Código Civil, consagra:

“Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal.”

En el mismo sentido, el artículo 867 del Código de Comercio, establece:

“Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte”.

Frente a las dos disposiciones citadas, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido:

“Estas normas, que permiten graduar la cláusula penal pecuniaria, contemplan una doble naturaleza al ejercicio de dicha potestad judicial, pues, además de erigirse como un “derecho” en favor de las partes, se establece como una obligación a cargo del juez, para efectos de considerar si la sanción pecuniaria se ajusta al principio de proporcionalidad y al criterio de la equidad.”[[4]](#footnote-4)

Las normas transcritas consagran el principio de proporcionalidad en materia de sanciones, que aplica completamente a los contratos y convenios estatales por expresa remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que los contratos estatales se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias expresamente reguladas por la mencionada ley. Es importante indicar que la norma citada aplica de manera indirecta al contrato de seguro, en la medida que **la aseguradora por expresa disposición del numeral 5.1.4.2.3 del Decreto 734 de 2012, está obligada a pagar el monto de la cláusula penal impuesta al contratista garantizado, en la medida que la misma se encuentre pactada en el contrato garantizado.**

**De conformidad con lo indicado, la cláusula penal se tiene que hacer efectiva en proporción al incumplimiento del contratista, por cuanto si se hace efectiva en un porcentaje mayor se generaría un enriquecimiento sin causa a favor de la entidad estatal contratante**. Así mismo, si no existió una causasión de perjuicios no se tiene porque hacer efectiva la cláusula penal, pues desborda el fin de la cláusula misma.

De esta manera, al descender al caso en concreto es apenas lógico que, a pesar de que la ALCALDIA fue incapaz de demostrar con criterio técnico el porcentaje de incumplimiento, lo único cierto es que esta misma ADMINISTRACIÓN en la Resolución No. 04 de 2025 ique no sufrió perjuicios con ocasión a la presunta demora del contratista, pues no utilizó recursos económicos ni humanos con respecto a ello, siendo así no existe un incumplimiento ni mucho menos motivos para solicitar la afectación de la cláusula penal. Siendo así es una potestad arbitraria como la que impuso esta administración, pues va en contra de los principios que ha delineado el ordenamiento jurídico colombiano.

**CAPITULO II. FUNDAMENTOS PARA ABSOVER A LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERTIVA DEL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL, EN VIRTUD DEL CLAUSULADO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 496 47 994000016253**

1. **LA RESOLUCIÓN 04 DE 2025, DESCONOCIÓ QUE EL CONTRATO DE SEGURO ES DE ÍNDOLE NETAMENTE INDEMNIZATORIO, CIRCUNSTANCIA QUE TRADUCE EN FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y DESVIACIÓN DE PODER PARA SU EXPEDICIÓN.**

Se funda el presente reparo en que la ALCALDIA, incurrió en un yerro insalvable desde que emitió citación a la presente Audiencia, pues bien, por una parte, formuló de manera ambigua unos presuntos cargos en que hizo consistir el presunto incumplimiento contractual, sin hacer alusión siquiera a un eventual perjuicio que pudiera derivarse del mismo.

Así las cosas, claro es que sin siquiera haber enunciado la causación de uno o varios perjuicios a raíz del incumplimiento en que a juicio de la entidad incurrió el contratista, mucho menos logró la Administración, demostrar fehacientemente que los hechos que dieron base a esta convocatoria generaran algún tipo de perjuicio a la entidad.

Dicho lo anterior, se insiste en que el contrato de seguro, de ninguna manera puede constituir fuente de enriquecimiento, sino que su carácter es meramente indemnizatorio y para hacerlo efectivo, ineludiblemente tendrá que demostrarse la configuración de un perjuicio imputable al contratista, tal como quedó pactado en el objeto del negocio aseguraticio.

Ahora, es menester recordarle a la entidad que el perjuicio, para efectos de revestir la virtualidad de indemnizable, **debe ser** **cierto[[5]](#footnote-5),** así lo ha reconocido la profusa jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que ha hecho especial hincapié en señalar que al comportar el perjuicio alegado, el menor grado de incertidumbre, no asiste derecho a quien lo reclama, de ser indemnizado, de lo contrario, se estaría incurriendo en un enriquecimiento sin justa causa, figura rotundamente prohibida en nuestra legislación.

Es así, como la Administración a este trámite sancionatorio, si bien es cierto y sin mayor concreción fáctica ni jurídica, enunció en la citación al presente trámite, un presunto incumplimiento contractual, no es menos cierto que, NO hizo lo propio, precisando cuál o cuáles pudieran ser los eventuales perjuicios generados a raíz del mismo, pues el mismo reconoció que no existió un perjuicio ocasionado a la entidad, es decir las demoras podrías tomarse como realmente insignificantes si es que efectivamente se presentaron demoras.

En mérito de lo anterior, concluyo que el Acto Administrativo recurrido, al imponer a mi procurada una obligación de pago, sin estructurar un perjuicio cierto, desconoció los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben gobernar la potestad sancionatoria del estado, extralimitándose en su función, pues aunado a lo anterior, motivó falsamente la decisión de sancionar y hacer efectivo el amparo de cumplimiento, lo cual a todas luces deriva en la ilegalidad de la decisión proferida, siendo procedente su revocatoria, lo cual solicito de manera respetuosa.

1. **EL DESPACHO NO TUVO ENCUENTA LAS EXCLUSIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 496 47 994000016253**

En los alegatos se solicitó que, sin perjuicio de lo expuesto y dejando claro que no se asume responsabilidad alguna, en caso de que el despacho considere necesario afectar la póliza vinculada a mi representada, se tomen en cuenta las exclusiones acordadas en dicha póliza. Sin embargo, la Administración no realizó ninguna manifestación al respecto, vulnerando el derecho de defensa y contradicción, pues no tuvo en cuenta que la póliza excluye lo siguiente:

2.1 Causa Extraña, esto incluye la fuerza mayor o el caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.

En efecto, el artículo 1056 del Código de Comercio establece que el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume, de modo que la concertación de las aludidas causales de exclusión de cobertura tiene sustento en el citado precepto normativo, que dispone:

“Artículo 1056. Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.

El artículo 1056 del Código de Comercio otorga al asegurador la facultad de delimitar los riesgos que asume, estableciendo expresamente que su obligación solo es exigible cuando el siniestro se enmarca dentro de los riesgos cubiertos por la póliza. En este caso, dentro de las exclusiones pactadas se encuentra la "causa extraña"**,** que abarca eventos de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima**.** Como se ha demostrado a lo largo del proceso, el cumplimiento del contrato se vio afectado por decisiones administrativas de la UAERMV, las cuales determinaron la cancelación de ciertos equipos y modificaron las condiciones de ejecución, generando confusión sobre las solicitudes de maquinaria y alterando la operatividad del contrato. De igual manera, factores externos como condiciones climáticas adversas y dificultades logísticas impactaron la entrega de algunos equipos, sin que esto pueda ser imputado al contratista como un incumplimiento real. Por lo que la póliza no podía haber sido afectada por la Administración.

1. **EN TODO CASO DEBERA TENERSE EN CUENTA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD, CONDICIONES DEL SEGURO Y DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 496 47 994000016253**

De no prosperar las excepciones y exclusiones propuestas, sin que implique confesión alguna, es necesario que se tenga a consideración el límite a la suma asegurada, es decir, la suma máxima que la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. pagaría a título de reembolso en razón de la responsabilidad que eventualmente pudiere haberse causado durante la vigencia de la póliza, de tal suerte, que si antes de proferirse sentencia en este proceso, el asegurador hubiere tenido que reconocer condenas correspondientes a esta vigencia, dichos pagos afectaran el valor asegurado reduciéndolo en dicha proporción hasta concurrencia del valor asegurado. De conformidad como se establece en el estatuto Comercial:

“**ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA:** El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”

En virtud de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. 496 47 994000016253, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido, Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de las Pólizas, así:

Por todo lo expuesto, respetuosamente solicito al Honorable Despacho que tome en consideración que, aunque el riesgo asegurado no se ha materializado en el caso analizado y los Contratos de Seguro no brindan cobertura por las razones expuestas anteriormente, las pólizas incluyen límites y valores asegurados que deben ser considerados por el Despacho en el improbable caso de una condena en contra de la entidad asegurada.

## PETICIONES

**PRIMERA:** Conforme con los argumentos expuestos a lo largo de este escrito, solicito respetuosamente se **REVOQUE** **Y REPONGA** la Resolución No. 04 de 2025 y en su lugar se declare el **ARCHIVO** del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual, toda vez que no se ha acreditado ningún incumplimiento parcial o total en la ejecución del Contrato de Arrendamiento de Muebles No. 523 de 2022, tampoco se acreditó la causación de perjuicios para la Administración lo que concluye indefectiblemente que no existen motivos para afectar la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 496 47 994000016253.

**SEGUNDA:** Se **DESVINCULE** a la compañía de seguros, toda vez que no existen argumentos facticos ni jurídicos que soporten la justificación de la afectación de la cláusula penal y la configuración del siniestro pues la Administración manifestó que no se le ocasionaros perjuicios.

Respetuosamente,

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

1. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 26862 del 13 de noviembre de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. [↑](#footnote-ref-1)
2. ESCOBAR GIL Rodrigo. Teoría General de los contratos de la administración pública. Editorial Legis. Edición 2003. [↑](#footnote-ref-2)
3. PINO RICCI Jorge. El régimen jurídico de los contratos estatales. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. Primera Edición, 2005. Página 398. [↑](#footnote-ref-3)
4. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 13 de noviembre de 2008. Rad. 17009. C.P. Dr. Enrique Gil Botero [↑](#footnote-ref-4)
5. Consejo de Estado, Sección tercera, subsección A 27 de enero de 2012. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Exp. 20614. [↑](#footnote-ref-5)